INFORME N° 5 (Parte 1)

IMPORTANCIA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL INTERNO

De las diversas materias que se han estudiado a fin de implementar un sistema que permita que los privados de libertad contribuyan o compensen al estado por los gastos que este incurre mientras están en dicha condición y habiendo tomado consciencia de la importancia de dichas materias, a continuación nos avocaremos a ver algunas clasificaciones o condiciones especiales de los internos debido a la importancia que esta materia representa en definitiva para abordar el tema principal del trabajo encomendado.

Se ha propuesto que uno de los fines principales de la pena es propender a la resocialización del delincuente, pero para que esto pueda ocurrir debemos conocer las características propias del sujeto haciendo un diagnóstico integral del mismo, logrando además con esta caracterización obtener una clasificación de modo que se facilite su cuidado, vigilancia e interacción al interior de los penales, evitando una especie de contaminación cruzada con otros tipos de delincuentes.

A continuación, con dicho objeto sintetizamos la escasa doctrina específica sobre esta materia, constituyendo el presente una primera parte referida en términos genéricos a la clasificación de los internos y a ciertas condiciones especiales que ellos reúnen, caracterización necesaria para implementar normas de trabajo al interior de los centros de reclusión. En una segunda parte, veremos situaciones en el derecho comparado en relación con esta materia a fin de ser replicadas en nuestro ordenamiento jurídico, de ser ello posible.

Importancia de la clasificación:

Clasificar a los internos es una tarea compleja y de importancia para los fines de reinserción, de ahí que para ello podemos principalmente resaltar tres aspectos más relevantes, sin perjuicio de otros que pudiesen apreciarse en menor medida

En primer término, efectuar una clasificación fundada desde un punto de vista criminológico, orienta y ayuda en el proceso de tratamiento en base a los diversos criterios de diagnósticos que tengan como referentes, además, la separación en grupos homogéneos posibilita la implementación más efectiva de las medidas resocializadoras, las que pueden ser idénticas atendiendo a la homogeneidad del grupo.

En segundo término, clasificar a la población penal también se hace necesario para evitar la influencia negativa de aquellos internos más desadaptados o violentos, sobre los menos peligrosos o con menor compromiso delictual. Efectuar una clasificación de la población penal y como consecuencia de ello, segregar a los diversos grupos penales de acuerdo a su peligrosidad, compromiso delictual u otros factores, por solo este hecho supone un avance desde el concepto clásico de prisión que tenían como función principal mantener reclusos en un mismo lugar a los diversos delincuentes sin importar su edad, peligrosidad o su carácter de reincidente, logrando el hacinamiento y como consecuencia de ello la promiscuidad social y delictiva, convirtiendo a estos centros de reclusión más en centros criminógenos que en centros de adecuada readaptación. Este aspecto crítico de las prisiones se puede enmendar efectuando una apropiada clasificación que evite los males internos antes descritos. Frank Loveland señalaba sobre el particular que "tanto la teoría como la práctica exige la separación delincuentes en grupos más o menos homogéneos, debido a que en las prisiones se recibe toda clase individuos, criminales empedernidos y aquellos que han cometido su primera falta; aquel de quien se sospecha que tratará de escapar y aquel otro que saldrá de la institución con orden de autoridad competente; el adolescente y el anciano; el enfermo y el saludable; el inteligente y el tonto; homosexuales, locos y psicopáticos".

En tercer término, clasificar a la población penal permite efectuar una adecuada separación de los reos, procura el control más efectivo de la disciplina y en consecuencia la mejor administración de cada cárcel.

Sobre el particular, Loveland sustentó que la clasificación desde un punto de vista criminológico ofrecía diversas ventajas, como las siguientes:

- 1.- Segregación adecuada de los diferentes tipos de delincuentes.
- 2.- Mayor supervisión y control de la custodia.
- 3.- Mayor disciplina
- 4.- Mayor productividad de los reclusos
- 5.- Organización efectiva de las facilidades de tratamiento y entrenamiento.
- 6.- Mayor continuidad de los programas tratamiento y entrenamiento
- 7.- Mejores actitudes de los reclusos
- 8.- Reduce los fracasos entre los internos puestos en libertad, etc.

Algunos Criterios de Clasificación:

Clasificar a los condenados supone ubicarlos en grupos diversos, grupos que tienen distintas características entre ellos y pero semejanzas muy afines entre los integrantes de cada grupo, todo ello con el objeto de permitir una adecuada separación entre ellos y así propender al logro del fin básico de resocializar al delincuente.

Sin embargo los criterios para lograr una óptima clasificación no siempre no son uniformes ni completamente eficientes, más aún no siempre se guían por los mismos principios. De aquí que la clasificación que en definitiva se efectúe dependerá del encargado de la misma quien puede tomar como base criterios diversos, ya sea desde el punto de vista penal, desde una perspectiva criminológica o desde un óptica penitenciaria.

En forma previa, siguiendo a Loveland, podemos sostener que la separación de reclusos siguiendo exclusivamente un determinado criterio no constituirá una clasificación óptima, ya sea siguiendo un criterio de acuerdo a la penalidad o en función de la edad, cada uno por sí solos no resultan suficientes para lograr el fin propuesto. Sin embargo, en la actualidad la separación de acuerdo a criterios individuales es la predominante a nivel general, pero sin lugar a dudas es dable de mejorar en la medida que la sociedad adquiera la

consciencia que ayudará en la meta final que es la resocialización del delincuente y bajar las tasas de reincidencia.

Clasificación desde el Punto de Vista Penal:

A la luz de la experiencia se puede observar que la clasificación más frecuente es aquella que se sustenta en encasillar al delincuente en función del delito cometido, así se habla por ejemplo de delincuentes sexuales. Si bien esta forma de clasificar a los reos presenta alguna importancia, en materia penitenciaria no tiene mucha utilidad práctica, porque dentro de un establecimiento penal la separación de reclusos sólo sobre la base de criterios penales descuida otros aspectos importantes para una buena clasificación. Por ejemplo, si se observa a los reos condenados por delitos de homicidio se podrán dividir ellos en dos grandes categorías: dolosos y culposos. A su vez entre los delitos de homicidio doloso se distinguen el homicidio agravado (parricidio, homicidio calificado, por ejemplo) y el atenuado (por emoción violenta, homicidio simple, etc.) De este modo, clasificar a todos los condenados por delito de homicidio en un solo grupo no es del todo certero, ya que como se ve constituyen un grupo heterogéneo. Igual fenómeno sucede con los otros tipos de delincuentes en función al delito cometido.

Del mismo modo, efectuar una clasificación basándose solo en los antecedentes penales o el grado de frecuencia delictiva es igualmente insuficiente, ya que desde estos puntos de vista se distinguen a delincuentes primarios, reincidentes y multireincidentes; aquí si bien puede relacionarse en algún grado la peligrosidad con la mayor frecuencia delictiva, no siempre ocurre así. En realidad puede haber un delincuente primario desde el punto de vista legal, pero multireincidente en los hechos; como también asimismo se pueden encontrar delincuentes multireincidentes que han cometido varios delitos que han sido descubiertos y procesados en todas esas oportunidades, como multireincidentes que a pesar de haber cometido múltiples delitos, respecto de gran parte de ellos no han sido perseguidos penalmente. Por otra parte, puede existir una multireincidencia en delitos leves y que no acarrea mayor peligrosidad para la sociedad ser reiterativo en su

conducta antisocial, ser catalogado como peligroso, frente a un delincuente primario que dada las particularidades del crimen cometido y su patrón de personalidad, realmente es un peligro para la sociedad y no ofrece un pronóstico positivo de reinserción. Es por todo esto que se señala que este criterio de la reincidencia debe ser empleado conjuntamente con otros indicadores adicionales.

Igualmente se puede considerar el criterio de la intencionalidad delictiva, separando a los internos por hechos dolosos de los culposos.

Las clasificaciones criminológicas:

Generalmente se fundamentan en la concepción etiológica del crimen, y dado que estas teorías explicativas del delito son diversas, la agrupación de los delincuentes según esta orientación se diferencia de las que siguen criterios puramente penales. Existen así clasificaciones con énfasis en los aspectos biológicos, ya sea de tipo constitucional o con predominio psiquiátrico; asimismo el énfasis puede ser en el aspecto psicológico o bien en el lado sociológico. También se puede dar una agrupación criminológica.

Clasificación penitenciaria multifactorial:

Con fines de eficiente ejecución de las penas y medidas de seguridad, deben de ubicarse los internos en cada régimen penitenciario siguiendo criterios que ayuden a los propósitos de la buena marcha administrativa del establecimiento y a los objetivos de la resocialización. En tal sentido consideramos que la clasificación penitenciaria supone dos vertientes:

Una clasificación penitenciaria administrativa, que trata de evitar el llamado "contagio moral" entre reclusos y que la cárcel no sea centro criminógeno, entre otros propósitos, y clasificación centrada en el diagnóstico individual con fines de tratamiento.

Propuestas de Clasificación:

Se ha propuesto diversas clasificaciones que tienen su origen en la experiencia penitenciaria, así por ejemplo las siguientes:

El año 1963, en España, el Ministerio de Justicia, señalaba que la primera clasificación atendía a la distribución de los reclusos al interior de las prisiones en "grupos de análogas características", esto con el objeto de facilitar la vigilancia personal y la adopción de tratamientos reeducadores individuales. Esta primera separación se configura desde una doble mirada: uno, la clasificación de los establecimientos carcelarios y dos, la separación de los reclusos dentro de prisión. Se propende que al interior de un determinado recinto penitenciario los reos deban estar ubicados en grupos homogéneos de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Deben estar separados entre sí hombres y mujeres, y su vez deben estar separados igualmente los detenidos y los sometidos a medidas de seguridad.
- Los reclusos preventivos (presos y detenidos) han de clasificarse en grupos, siguiendo criterios de edad, grado de reincidencia, peligrosidad, forma de culpabilidad y el tipo de delito atribuido.
- Los reclusos igualmente se deben clasificar atendiendo al grado o peligrosidad y al periodo de cumplimiento de su condena en la que se encuentren.

El académico **Mariano Ruíz Funes** consideró que hay que clasificar a los reclusos tomando como base los siguientes criterios:

- a) La edad
- b) El sexo
- c) Salud mental y física
- d) Carácter de primarios y reincidentes
- e) La peligrosidad

Clasificación atendiendo a las normas contenidas en las "reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos".

Aprobada el 30 de agosto de 1995 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

En esta oportunidad se recomendó la agrupación de los reclusos en categorías, señalando los siguientes principios:

- a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes. En un penal donde se reciban hombres y mujeres, los locales destinados a las mujeres deberán estar completamente separados.
- b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena
- c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles, deberán ser separados de los detenidos por infracción penal.
- d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos."

Los autores Abigail Bernard y Anders Hallstrom presentan un "sistema funcional" de clasificación, el que considera un gran cumulo de variables o indicadores, entre otros de índole legal y psicosocial, como los siguientes:

- 1.- edad;
- 2.- sexo;
- 3.- delito: según nivel de profesionalismo;
- 4.- delito: según la gravedad;
- 5.- delito: según la reincidencia;
- 6.- desviación sexual, homosexualidad;
- 7.- alcoholismo;
- 8.- consumo de drogas psicotrópicas;
- 9.- intoxicación aguda: alcohol, drogas, etc.;
- 10.- traumas recientes;
- 11.- neurosis;
- 12.- psicosis en general;
- 13.- capacidad de rendimiento por entrenamiento;
- 14.- daño mínimo cerebral;
- 15.- extroversión - introversión;
- 16.- formas punitivas;
- 17.- nivel de madurez;
- 18.- rasgos básicos de personalidad;
- 19.- tipología constitucional;
- 20.- cromosomas y metabolismo; y

21.- factores ambientales probables para el futuro.

Clasificación Multifactorial o Integral:

Del análisis de las opiniones ya reseñadas, se puede propugnar una clasificación penitenciaria que abarque los diversos tópicos mencionados, integrándolos en los seis siguientes que se pueden establecer como más importantes:

- Sexo, debe existir una separación entre hombres y mujeres a través de establecimientos independientes entre ellos.
- Situación jurídica, se deben separar los procesados de los condenados, procurando su estadía en centros diferentes. Esto cobra importancia en razón que cierta proporción de inculpados resultarán inocentes del hecho criminal imputado, y al no establecerse la separación en penales diversos o en pabellones independientes, el mismo régimen carcelario aplicable a procesados y sentenciados menoscabará a los procesados al estar sometidos a un régimen y reglas coercitivas de índole más grave aplicables a aquellos que deben cumplir una pena.
- Edad: los reclusos deben separarse también por la edad, en grupos que aglutinen a los jóvenes delincuentes y otro conformado por adultos y ancianos. No es recomendable que los criminales jóvenes compartan su vida penitenciaria con reclusos ancianos o adultos debido a que las diferencias de experiencia criminal, intereses, hábitos y aspectos fisiológicos, que conlleva la convivencia entre grupos heterogéneos de edad hará proclive la contaminación delictual de los más jóvenes.
- Intencionalidad, según este criterio se deben separar secciones para delincuentes culposos y secciones para reclusos dolosos, teniendo en cuenta que un delito intencional supone mayor peligrosidad que un acto culposo.
- Frecuencia delictiva, el grado de reincidencia es un aspecto importante, con las limitaciones indicadas, para separar a los reclusos primarios de los que están por segunda vez y de los multireincidentes .
- Normalidad y anormalidad mental: los internos también deben agregarse según criterios psico-sociales en anormales y normales.

Normas Internacionales de Aplicación General sobre Clasificación de Reclusos

Diversos documentos de la ONU, como las referidas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de 1955, las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes "Reglas de Bangkok" de 2011, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, "Reglas Mandela" de 2015, son coincidentes al estatuir que para el cumplimiento de los principios tendientes a lograr el fin de la pena, se requiere de un sistema de clasificación de los internos, para lo cual se debe contar con la infraestructura que permita satisfacerla de acuerdo a las distintas categorías determinadas.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955, han sido universalmente reconocidas y han tenido gran valor e influencia como guía en la elaboración de leyes, políticas y prácticas en la materia, por lo que respecto de la clasificación, se destaca:

"Regla 63. 1) (...) la individualización del tratamiento (...) requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los grupos." (...) "Regla 67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social."

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos "Reglas Mandela", explican que, sin reducir el alcance de las normas existentes, deberán cumplirse en virtud de la necesidad de su fortalecimiento, por lo que en relación a la clasificación vinculada al tratamiento refieren que:

"Regla 93.-1. Los fines de la clasificación serán: a) separar a los reclusos que, por su pasado delictivo o su mala disposición, pudieran ejercer una

influencia nociva sobre sus compañeros de prisión; b) dividir a los reclusos en categorías, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su reeducación. 2. En la medida de lo posible, se dispondrá de establecimientos penitenciarios separados, o de pabellones separados dentro de un mismo establecimiento, para las distintas categorías de reclusos.”

Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes “Reglas de Bangkok”, destacan también la importancia de la clasificación vinculada al tratamiento y a la reinserción social, determinan que:

“Regla 40 Los administradores de las prisiones elaborarán y aplicarán métodos de clasificación centrados en las necesidades propias de su género y la situación de las reclusas, a fin de asegurar la planificación y ejecución apropiadas e individualizadas de programas orientados a su pronta rehabilitación, tratamiento y reinserción social.”

“Regla 41 Para efectuar una evaluación de riesgos y una clasificación de las reclusas en que se tengan presentes las cuestiones de género, se deberá: (...) b) Posibilitar que a efectos de la distribución de las reclusas y la planificación del cumplimiento de su condena se tenga presente información fundamental sobre sus antecedentes, como las situaciones de violencia que hayan sufrido, su posible historial de inestabilidad mental y de uso indebido de drogas, así como sus responsabilidades maternas y de otra índole relativas al cuidado de los niños; (...) d) Velar por que se albergue a las reclusas que requieran atención de salud mental en recintos no restrictivos y cuyo régimen de seguridad sea lo menos estricto posible, así como por que reciban tratamiento adecuado en lugar de asignarlas a centros cuyas normas de seguridad sean más rigurosas por la exclusiva razón de que tengan problemas de salud mental.”

La clasificación en este contexto permite reunir el conocimiento del interno, a través del cual las decisiones importantes que le afectan deben ser coordinadas bajo un sistema administrativamente definido.

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), organismo que tiene, entre otros objetivos estratégicos el de promover en los gobiernos la adopción y aplicación de las normas, directrices y procedimientos que haya recomendado las Naciones Unidas, realizó en Panamá, en febrero de 2015, el "Taller regional para la clasificación de privados y privadas de libertad en los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)", con el propósito de mejorar las competencias técnicas y profesionales de los operadores de los centros penitenciarios sobre las tipologías y metodologías para la clasificación.

La Declaración de Doha, de 2015, es otro documento en el cual se destaca la importancia de aplicar los instrumentos internacionales en relación con el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad, mejorando "las políticas penitenciarias centradas en la educación, el trabajo, la atención médica, la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia."

Las ordenanzas internacionales detalladas son coincidentes en reconocer la importancia del principio de excepción para aquellas restricciones legales hacia las personas privadas de libertad, a quienes se deben respetar sus derechos humanos, destacando que la reintegración social es objetivo esencial del sistema penitenciario. Los estándares que derivan de las normatividades nacional e internacional mencionados, coinciden en la necesidad de efectuar una adecuada clasificación inicial de acuerdo a los criterios generales que en las mismas se prevén, y que en el marco del proceso de individualización del tratamiento, requiere de un análisis técnico especializado.

EL TRABAJO EN EL CAMPO PENITENCIARIO

Concepto y Carácter del Trabajo Penitenciario:

Concepto e importancia:

El trabajo penitenciario denominado también "*ergoterapia*" o "*laborterapia*", se establece como política que tiene gran aceptación y se considera por los diferentes autores como una de las medidas con mejor resultados en los procedimientos para alcanzar la efectiva resocialización del delincuente. Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en considerarla una forma de tratamiento, así para **López Rey y Arrojo** el trabajo forma parte inherente del ser humano y por dicha razón no puede considerarse un medio de tratamiento.

Patricia Kurczyn señala que el trabajo penitenciario "es la actividad o conjunto de ellas que los sujetos privados de su libertad ejecutan dentro de los recintos de las cárceles conforme a los ordenamientos legales que correspondan".

El autor Luis Alarcón Flores estima que "es una actividad de producción de bienes o prestación de servicios, por parte de los internos y de los condenados a una medida de privación o restricción de la libertad, organizada de tal modo que contribuya a su resocialización".

Para este autor el trabajo presenta importancia desde los siguientes puntos de vista:

- a) En el ámbito de la ejecución penal, cobra importancia porque la influencia del trabajo toma valor como medida reeducadora o reformadora de la conducta del condenado. Esta funcionalidad del trabajo penitenciario es la que más se ha considerado a la hora de promover su ejecución, incluso otorgándole alcances de reivindicación personal al señalar que "el trabajo era como un tónico que eleva y vivifica la vida carcelaria y que educa al recluso" (Concepción Arenal, Siglo XIX).
- b) En el ámbito social, atendiendo a que el trabajo permitirá dar al recluso una formación en algún oficio a actividad útil para la sociedad, además su desarrollo conllevará la adopción de una disciplina laboral por parte del recluso que le servirá cuando salga en libertad. El trabajo repercute de esta manera en la capacitación ocupacional del condenado

y facilitaría una reinserción social menos traumática y con perspectivas más altas que de no haber tenido algún ejercicio laboral durante el tiempo que estuvo recluso producto de su condena.

c) En el ámbito económico, sin lugar a dudas la actividad productiva de los reclusos presenta diversas repercusiones económicas. Por muy escasa que sea la producción de los condenados presenta cierta incidencia en el desarrollo económico nacional, pero también desde el punto de vista familiar puede propender a superar el problema económico que se produce a raíz de la dependencia familiar que sostenía el actual cuando estaba libre. Asimismo, también puede el producto del trabajo contribuir o hacerse cargo de los costos que implica mantener y vigilar al condenado en prisión, todo ello según el tipo de reglas que regulan esta forma de trabajo estipulándose en algunos ordenamientos jurídicos que parte del producto debe ser destinado a cubrir su propio sostenimiento dentro de la cárcel o cubrir los gastos en que el estado incurre para mantenerlo en prisión.

Carácter del trabajo penitenciario.

El hecho de que existan diversas consideraciones acerca de que si el trabajo debe ser estimado o no como un derecho del condenado, o una obligación impuesta o bien un medio de tratamiento, nos lleva a dilucidar el carácter o naturaleza del mismo. Al respecto existen tres tendencias fundamentales.

Trabajo penitenciario como Derecho del interno.

Según este parecer, todos los seres humanos tienen derecho al trabajo. "Derecho que incluso es consagrado por el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". Sin embargo, debemos aclarar que este principio, muchas veces no pasa de ser una declaración lírica, ya que en la realidad concreta de muchas sociedades denominadas desarrolladas como subdesarrolladas, existe gran cantidad de desocupados que aspiran a contar con un puesto laboral y que no tienen en que trabajar. Asimismo en nuestra Constitución Política vigente se estipula como un "Derecho de toda persona el elegir y ejercer

libremente su trabajo, pero en los hechos concretos queda como un derecho declarativo, no habiendo mecanismos que permitan al ciudadano hacer efectivo dicho derecho constitucional. Esta contradicción se hace más notoria en los centros de ejecución penal, por la falta de puestos de trabajo para la población de condenados.

El trabajo penitenciario como obligación del interno:

Se pueden apreciar dos vertientes en esta tesis.

Históricamente una tendencia se relaciona con el punto de vista de considerar el trabajo como parte de la pena aplicada al delincuente. Esta obligación legal de imponer el trabajo estuvo aparejada, en forma encubierta o franca, con diversos grados del trabajo forzado, atentando contra derechos humanos del interno. Esta práctica del trabajo obligatorio forzado, muchas veces mediante la compulsión física, hoy superada, sin embargo persiste en parte de la opinión pública cuando reclama que a los delincuentes se le envíe a trabajar en labores pesadas por ejemplo.

Actualmente se considera que el trabajo de los condenados viene a ser una obligación no compulsiva o forzada físicamente, por cuanto esta actividad no se encuentra mayormente sometida al arbitrio de la administración penitenciaria, sino más bien se estipulan garantías legales, propiciando que esta práctica laboral, tenga las condiciones y garantías parecidas al trabajo en libertad.

El trabajo penitenciario como medio de tratamiento, al margen que pueda hacerse efectiva como un derecho u obligación, constituye una forma de tratamiento con diversos grados de importancia, en función de las características personales o habilidades del condenado. Hay que considerar que en sociedades de consumo como la nuestra, el tipo de ideología imperante, el desquiciamiento de valores por los medios de comunicación masiva, no estimulan en nuestra realidad una actitud favorable hacia el trabajo y muchas personas no sienten ninguna atracción por este tipo de actividad humana, y más bien tratan de utilizar canales ilegítimos y de índole antisocial para obtener los medios que le permitan satisfacer sus necesidades.

Condiciones Básicas del Trabajo Penitenciario:

Hoy en día se considera que el trabajo de los condenados debe ser en lo posible semejante a reunir condiciones similares al trabajo libre, con las particularidades propias que les son inherentes. Estos principios o condiciones han sido aceptadas por las Naciones Unidas.

- El trabajo penitenciario no debe tener carácter aflictivo: Así lo recomiendan las reglas mínimas de Naciones Unidas. Esto supone que el trabajo que se provea en los centros carcelarios no deba contener la idea de sufrimiento o castigo, porque sería contraproducente para la readaptación del interno, y originaría más bien rechazo por la actividad laboral.
- No debe atentar contra la dignidad del recluso: Esto significa que no debe imponerse una actividad ocupacional que vaya contra la dignidad personal del interno, ni ser impuesta en contra de sus particularidades físicas, vocacionales, hábitos o formación laboral.
- Debe tender a proporcionar un oficio o profesión: o bien a aumentar su actual capacidad laboral: Partiendo del hecho que muchos delitos son producto de la falta de formación ocupacional del condenado que no lo permite poder obtener su supervivencia en forma socializada, es importante que la institución penitenciaria le posibilite la ocasión de recibir una capacitación profesional en algún oficio según habilidades e intereses.
- La organización y métodos del trabajo penitenciario deben ser similares al trabajo libre. Este principio se fundamenta en la necesidad de que el trabajo como medida contribuyente al tratamiento del condenado, sirva también para que al finalizar la fase de ejecución penal pueda estar apto para las condiciones del trabajo libre.
- Debe estar dirigido preferentemente por la administración penitenciaria: Generalmente el trabajo es organizado por la entidad penitenciaria, pero también es posible que esté financiado por instituciones o empresas privadas. Sin embargo en estos últimos casos, se recomienda que la dirección quede en manos de la administración carcelaria.
- Debe proteger la salud y seguridad de los reclusos.

- Debe remunerarse en forma equitativa, generalmente se considera que la remuneración del trabajo penitenciario debe ser similar al del trabajo en libertad, estipulándose sin embargo que del salario respectivo se distribuya una parte para su familia, otra para sus gastos personales, asimismo para los gastos que ocasione al establecimiento penitenciario y otra para cubrir la reparación civil.
- La jornada de trabajo no debe exceder de las ocho horas diarias.

Modalidades y Áreas del Trabajo Penitenciario:

Conforme a la experiencia en este aspecto y considerando asimismo lo que señala la legislación penitenciaria nacional, podemos apreciar que las modalidades y áreas del trabajo son bastante amplias. Además el trabajo debe organizarse y planificarse atendiendo a las aptitudes y calificación profesional, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales del condenado, en cuanto sean compatibles con la seguridad del establecimiento penitenciario.

Modalidades del trabajo carcelario:

De acuerdo al propósito que orienta la actividad laboral del condenado se considera que el trabajo realizado dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios está comprendido en cualquiera de las siguientes modalidades.

- a) La formación profesional
- b) Las dedicadas a la enseñanza y formación académica
- c) Las productivas
- d) Las artesanales, intelectuales y artísticas.
- e) Las prestaciones personales en servicios auxiliares del centro penitenciario: incluye trabajos de cocina, lavandería, panadería, almacén y otros propios del administración o penitenciaria.

CLASIFICACION DE LA POBLACION PENAL Y GRUPOS VULNERABLES

El autor Laubenthal (2003) define la clasificación de la población penal como la construcción formal de clases de reclusos así como la asignación de establecimientos y secciones creadas para cada uno de estos grupos.

A nivel internacional, diversos tratados e instrumentos recogen los objetivos y criterios de clasificación de la población penal. En cuanto a los objetivos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en sus números 67, 68 y 69, señalan que los fines de la clasificación deberán ser:

a) separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención;

b) repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social. Para lo anterior se requiere, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos.

La regla 69, dentro de la reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, recoge la vinculación entre clasificación y el principio de diferenciación señalando que tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones. En la misma línea se pronuncia el principio XIX de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en Las Américas, al señalar que las personas privadas de libertad pertenecientes a diversas categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, según su sexo, edad, la razón de su privación de libertad, la necesidad de protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad o del personal, las

necesidades especiales de atención, u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna.

Criterios de Clasificación.

En lo que se refiere a los criterios de clasificación tanto el PIDCP (art.10.2), la CADH (art.5.4 y 5.5), las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (regla 8), las Reglas de Bangkok (reglas 40 y 41), así como el principio XIX ya mencionado, todos establecen como criterios básicos de separación los siguientes: la calidad procesal, la edad y el motivo de la privación de la libertad, de tal forma que los detenidos y procesados en prisión preventiva estén separados de los condenados; los jóvenes de los adultos y los privados de libertad por razones civiles separados de aquellos que lo están por razones penales. Por su parte, el Principio XIX va más allá, estableciendo nuevas categorías o clases de reclusos que deben considerarse al momento de su ubicación en unidades penales o secciones de ella. Estos grupos son las personas adultas mayores, los solicitantes de asilo y refugio y las personas privadas de libertad a causa de infracciones a las disposiciones sobre migración. Se establece que en caso de privación de libertad de los dos últimos grupos, los niños y niñas no deberán ser separados de sus padres y no podrán ser recluidos en establecimientos destinados a condenados o acusados por infracciones penales. Finalmente, este principio recoge una norma de trato que prohíbe utilizar la separación por categorías como justificación de medidas discriminatorias, imposición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o condiciones de privación de libertad más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de personas y dispone que estos mismos criterios se observen durante los traslados.

Un elemento innovador es planteado en la Reglas de Bangkok, al incorporar la perspectiva de género, más allá de la tradicional separación por sexo, e indicar que los administradores de las prisiones elaborarán y aplicarán métodos de clasificación centrados en las necesidades propias del género y la situación de las reclusas, a fin de asegurar la planificación y ejecución apropiadas e individualizadas de

programas orientados a su pronta rehabilitación, tratamiento y reinserción social (regla 40). Los criterios a considerar para evaluar adecuadamente los riesgos y efectuar una clasificación de las reclusas de manera adecuada son los siguientes (regla 41):

- i. Tener en cuenta que las reclusas plantean un menor riesgo para los demás en general, así como los efectos particularmente nocivos que pueden tener las medidas de alta seguridad y los grados más estrictos de aislamiento en las reclusas;
- ii. Posibilitar que a efectos de la distribución de las reclusas y la planificación del cumplimiento de su condena se tenga presente información fundamental sobre sus antecedentes, como las situaciones de violencia que hayan sufrido, su posible historial de inestabilidad mental y de uso indebido de drogas, así como sus responsabilidades maternas y de otra índole relativas al cuidado de los niños;
- iii. Velar por que en el régimen de cumplimiento de condena de las reclusas se incluyan programas y servicios de rehabilitación que satisfagan las necesidades propias de su género;
- iv. Velar por que se albergue a las reclusas que requieran atención de salud mental en recintos no restrictivos y cuyo régimen de seguridad sea lo menos estricto posible, así como por que reciban tratamiento adecuado en lugar de asignarlas a centros cuyas normas de seguridad sean más rigurosas por la exclusiva razón de tener problemas de salud mental.

En cuanto a las normas nacionales, tanto el Código Procesal Penal, como la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, en sus arts. 17 y 56, y su reglamento en su art.154, como también el reglamento de establecimientos penitenciarios contemplan diversos criterios de clasificación. Así tenemos que el Código Procesal Penal, en su art.150, inc.2° dispone que "la prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizaren para los condenados o, al menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para estos últimos", agregando en su inc.4° que "el tribunal deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de

la integridad física del imputado, en especial aquellas destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad ”.

Por su parte, el reglamento de establecimientos penitenciarios recoge los criterios de clasificación de la normativa internacional en diversas disposiciones, tales como:

1.- El art.13 se refiere a los criterios orientadores en la creación de establecimientos penitenciarios: sexo, edad, nivel de compromiso delictual, tipo de infracción, necesidades de reinserción social y necesidades especiales de seguridad y salud;

2.- El art.14 establece la creación de establecimientos dedicados a la atención especializada de detenidos, sujetos a prisión preventiva, y condenados. Cuando ello no fuere posible, en los establecimientos penitenciarios deberán existir dependencias para detenidos y, a lo menos, para sujetos a prisión preventiva, por una parte, y condenados, por otra, con las separaciones adecuadas:

3.- Finalmente, el art. 19 establece que en aquellos lugares donde no existan centros penitenciarios femeninos, las mujeres permanecerán reclusas en dependencias separadas del resto de la población, sin perjuicio de que se incorporen a actividades conjuntas con la población penal masculina.

Más allá de los criterios legales de clasificación de la población penal, diversas disposiciones internas de Gendarmería de Chile incorporan otras variables o criterios que importan un mayor grado de segmentación. Ellos se orientan a contribuir a un adecuado nivel de seguridad y control de la población penal, a evitar o disminuir el contagio criminógeno, mejorar la calidad de vida de los reclusos, favorecer el tratamiento penitenciario, contribuir a disminuir el deterioro físico y psicológico que provoca la reclusión, todo ello entre otros fines.

Los criterios incorporados son:

i) Tipo de delito: normalmente se consideran en esta variable los delitos sexuales, las faltas y los delitos de tráfico de estupefacientes.

En relación a los primeros, dentro de la cultura carcelaria, estos constituyen uno de los delitos más estigmatizantes. Este tipo de

reclusos son frecuentemente hostigados por la población penal, pueden incluso ser objeto de graves agresiones por parte del resto de la población reclusa, por lo que resulta imperiosa su separación total para asegurar su integridad física y psíquica.

En cuanto a las faltas, estas se refieren al no pago de pensiones alimenticias, daños menores, lesiones leves, infracción a la ley electoral, etc. Este es un grupo que permanecerá durante un tiempo muy reducido bajo custodia de Gendarmería, por lo que los esfuerzos deben encaminarse a minimizar los efectos deteriorantes de la reclusión. Para ello, la reclusión debe realizarse en lugares o secciones destinadas a primerizos, sin contacto alguno con otras poblaciones penales.

ii) Compromiso delictual: este criterio de clasificación busca medir el grado de involucramiento o habitualidad del recluso en la actividad delictiva y se aplica tanto a imputados en prisión preventiva como a condenados. Permite segmentar a la población penal en las categorías de alto, mediano y bajo compromiso delictual. Se espera un comportamiento diferencial según compromiso delictual y por ende es necesario un tratamiento diferenciado en cada uno de los grupos. Esta variable se determina en una entrevista personal mediante la aplicación de un instrumento que recoge variables diferenciadas por sexo, a las cuales se les asigna un determinado porcentaje el que arroja el índice de compromiso delictual de la persona. Es importante señalar que este instrumento no está diseñado para medir el riesgo de reincidencia ni tampoco puede pronosticarla, sino aborda únicamente el nivel de involucramiento del recluso con la actividad delictiva. Los reclusos con un índice alto de compromiso delictual son aquellos que presentarían una mayor vinculación con la actividad delictiva, constituyéndose ésta en su principal actividad. El recluso con un índice mediano de compromiso delictual se caracteriza por un involucramiento significativo en el delito, pero sin reunir características o condiciones muy arraigadas, lo que otorga mayores posibilidades de reinserción social. Finalmente, el índice de bajo compromiso delictual se identifica normalmente con reclusos primerizos cuyas características le permiten grandes posibilidades de reinserción social.

- iii) Adultos mayores: esta población presenta necesidades especiales de salud y mayor dificultad para protegerse de posibles agresiones de las poblaciones más jóvenes, por lo que resulta necesario separarla del resto de la población penal.
- iv) Reclusos con patologías psiquiátricas o desórdenes mentales severos: normalmente presentan conductas poco adaptativas al sistema penitenciario, pudiendo incluso atentar contra su propia vida, por lo que la segmentación debe ser muy rigurosa generando puentes de contacto fluido con el sistema de salud con que cuente la unidad.
- v) Reclusos con medida alternativa de reclusión nocturna: la Ley 18.216 que norma este tipo de reclusión parcial, que en términos ideales debería funcionar en dependencias o establecimientos distintos de las unidades penales cerradas, en la práctica es aplicada al interior de los establecimientos penales. Por ello, es necesario generar espacios adecuados para albergar a este grupo, el que no deberá tener contacto alguno con el resto de la población penal. Esto irá en directo beneficio tanto de la unidad, como del usuario de esta medida, ya que evitará el contacto, minimizando el contagio criminológico.
- vi) Reclusos que gozan de la salida controlada al medio libre: a diferencia de la reclusión nocturna, estos beneficiarios son internos que luego de una permanencia prolongada en reclusión, producto de su positivo proceso de reinserción social, han sido beneficiados con salidas al medio libre. Estos beneficiarios están en un proceso de desinstitucionalización, por lo que están desvinculándose de la vida carcelaria. Por tanto, no es pertinente que tengan contacto con los reclusos, así como tampoco con los usuarios de reclusión nocturna, quienes no poseen experiencias de reclusión.
- vii) Reclusos con necesidades de protección especial (aislados): en la mayoría de los penales existen internos que presentan problemas con el resto de la población penal. Normalmente se les denomina "aislados". respecto de este segmento, no basta con una separación por condición procesal o compromiso delictual ya que en muchos de los casos expresan o manifiestan correr serio riesgo en la población penal, derivado de su conducta o acciones anteriores, ya sean éstas al interior

de los recintos penales o en la propia comunidad. Es por ello que se sugiere su segmentación total evitando en lo posible el contacto con el resto de la población.

A las anteriores consideraciones se agregan otros como la orientación sexual, la calidad de ex uniformados, madres con niños lactantes, reclusos pertenecientes a alguna etnia, etc.

Finalmente, la infraestructura de la cual se disponga para la ubicación de los internos es de suma importancia, toda vez que las mejores técnicas aplicadas en materia de clasificación penitenciaria y el éxito de los planes y programas de reinserción social dependerán en gran medida de la disponibilidad de las instalaciones adecuadas.

Tratamientos para la reinserción.

Tratamiento para drogo-dependencia.

No existen referencias explícitas en la normativa internacional sobre la necesidad de contar con un tratamiento por consumo problemático de drogas en el contexto penitenciario. Ello a pesar de que gran parte de los sistemas penitenciarios han reconocido la importancia de la reintegración social como finalidad de su gestión y que el consumo de sustancias psicoactivas constituye un factor de riesgo preocupante en el comportamiento delictivo.

La única norma internacional que expresamente se refiere a este punto la encontramos en las Reglas de Bangkok, que en la regla 15 señala que "los servicios penitenciarios de salud deberán suministrar o facilitar programas de tratamiento especializado del uso indebido de drogas para las mujeres, teniendo en cuenta su posible victimización anterior, las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres con niños y la diversidad de sus tradiciones culturales".

La relación entre las drogodependencias y la conducta delictiva ha sido estudiada con fuerza desde fines del siglo pasado. Hoy existe una asociación innegable, pero aún no se ha podido establecer con exactitud el vínculo exacto entre ambas conductas ni de qué manera una puede influir en la génesis de la otra.

Dada la importancia del abordaje de consumo problemático de drogas en personas privadas de libertad, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), pusieron a disposición de la población penal adulta de Chile el "Programa de Tratamiento y Rehabilitación en Población Penal Adulta". Fue así, que el año 2000, Gendarmería de Chile y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacentes (CONACE), del Ministerio del Interior, el que luego fue reemplazado por SENDA, firmaron un convenio de colaboración para diseñar en conjunto un programa de tratamiento y rehabilitación para el consumo problemático de drogas de la población penal adulta. Esto se tradujo en la creación de centros de tratamiento y rehabilitación en diversos centros penales del país, los que iniciaron su funcionamiento en el año 2003, llegando el año 2013 a contar con 15 centros en funcionamiento en el subsistema cerrado, distribuidos en 10 regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Maule, Bio-Bio, Araucanía, Aysén, Magallanes y Metropolitana. Se destaca durante el 2013 la creación de tres nuevos centros de tratamiento (en cárceles de Aysén, Punta Arenas y Antofagasta) y la ampliación de la cobertura de atención del centro que funciona en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. La cobertura neta de personas atendidas al mes de diciembre del 2013 alcanzó a 1.143 internos (703 hombres y 440 mujeres) en las distintas modalidades de tratamiento: pre-tratamiento (bajo umbral), tratamiento (alto umbral) y seguimiento.

Este programa pretende "crear las condiciones institucionales para favorecer un estilo de vida saludable dentro de los recintos penitenciarios, promocionando los beneficios de una vida comunitaria pro-social, limpia y libre del consumo de drogas en aquellos internos que presentan un mayor nivel de vulnerabilidad, de tal modo de responder satisfactoriamente tanto a las políticas nacionales de prevención secundaria del delito como a las políticas de prevención y rehabilitación de personas adictas a sustancias ilícitas" (Convenio de Colaboración de Gendarmería de Chile- CONACE, 2000). Por lo tanto, su objetivo es contribuir a rehabilitar a las personas que presentan

consumo problemático de drogas que ingresan a los centros de tratamiento de adicciones del subsistema cerrado y abierto. El ingreso a este programa de tratamiento es voluntario.

Programa de Reinserción Social de Personas Condenadas por Infracción a la Ley Penal de los Centros Penitenciarios Colina I y II, Región Metropolitana y Centro Penitenciario de Valparaíso, Región de Valparaíso y Centro Penitenciario Concepción, Región del Bío-Bío .

El programa de reinserción social de personas condenadas por infracción a la ley penal se enmarca en las orientaciones y principios del plan de seguridad pública "Chile en paz" y en las iniciativas impulsadas por Gendarmería de Chile en materia de reinserción social. Para el Ministerio del Interior el programa se orienta en uno de los ejes de la estrategia nacional de seguridad pública, el que constituye el principal instrumento de gestión del gobierno.

En el año 2007 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, través de la entonces Seguridad Pública, hoy Subsecretaría de Prevención del Delito, diseño y concretó la puesta en marcha de un programa piloto mediante un convenio de colaboración con Gendarmería de Chile, mediante dicho piloto, se establecieron programas de intervención tanto en el medio cerrado como en el medio libre, los que se encuentran insertos en las siguientes unidades penales y centros de reinserción social en Región Metropolitana: Colina I, Colina II y Centro de Reinserción Manuel Rodríguez; V Región: CCP Valparaíso y centro de reinserción social. Durante el gobierno anterior del Presidente Sebastián Piñera (2011-2014) el programa se insertó en la estrategia de seguridad denominada "Chile Seguro", vinculándose al ámbito específico de la rehabilitación y reinserción social, donde el objetivo de esta área está asociado a evitar o disminuir el nivel de reincidencia de personas infractoras a la ley penal, aportando así al "cierre del ciclo de delito" (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y Gendarmería de Chile, 2012). Estos programas han estado bajo la ejecución de Gendarmería de Chile, pero siendo gestionados por el ministerio del interior. No

obstante, actualmente se está proyectando el traspaso integral del programa a la órbita de Gendarmería.

El objetivo general del programa es facilitar y apoyar el proceso de reinserción social de penados que cumplen condena en las unidades de CCP Colina II, CCP Colina I, CP Valparaíso y CP Concepción, incluidos entre ellos los usuarios que acceden a permisos de salida dominical y salida de fin de semana; y aquellos que gozan del beneficio de salida controlada al medio libre y que forman parte de la población objetivo del programa, contribuyendo con ello a reducir el riesgo de reincidencia delictual.

Los Grupos Especialmente Vulnerables

I.- Si el régimen penitenciario debe consistir en un tratamiento cuya finalidad esencial se orienta a la reforma y readaptación social de los penados, favoreciendo su reinserción, será necesario prestar especial atención a la diversidad del ser humano, garantizando que en la medida de lo posible las condiciones regimentales tengan en cuenta las necesidades básicas de los grupos resultantes. Se ha criticado, en ocasiones, que una política penitenciaria diversificadora corre el riesgo de disolver el principio de igualdad objetiva ante la ley, que informa todo el sistema penal; sin embargo, semejante argumento ignora que este principio exige tratar desigual aquello que lo es y, nadie, pone en duda que determinados grupos humanos presentan especiales dificultades de adaptación a la cárcel que deben ser prioritariamente atendidas. Debido a sus especiales características necesitarán de un tratamiento especializado. Bajo este epígrafe vamos a referirnos a estos colectivos con la terminología de "grupos especialmente vulnerables", en el que incluimos a las mujeres, jóvenes, extranjeros y otros grupos, como las personas con discapacidades, los ancianos, los enfermos de sida y las minorías sexuales.

Lamentablemente las separaciones convencionales, tradicionalmente asumidas por la mayoría de los sistemas

penitenciarios, no van seguidas de un diseño regimental de adaptación, sino que se quedan, en eso, en meras separaciones porque para orientar correctamente las clasificaciones constituye un presupuesto ineludible contar con posibilidades materiales de medios y de personal, que van más allá del espacio fraccionado, con las que no cuenta la administración penitenciaria. Cuando las separaciones no implican unos cambios regimentales sensibles a las necesidades de cada grupo, lo que, inicialmente, pudiera ser entendido como un derecho del grupo separado, termina convirtiéndose en una segregación encubierta en favor del grupo dominante.

II.- La tendencia a clasificar y separar la población reclusa no es un fenómeno actual ni reciente, ya que en los primeros vestigios de las regulaciones penitenciarias se observa el interés por romper la conciencia del grupo y los peligros de movimientos solidarios por medio de rígidos criterios de separación. En sus orígenes la clasificación cumple una función esencialmente disciplinaria, con ella se trata de evitar la tradicional masificación que a la postre ofrecían las condiciones idóneas para todo tipo de conflictividad en el mayor de los anonimatos. La disciplina, como apunta Foucault, requiere ante todo la distribución de los individuos en el espacio; los emplazamientos funcionales codifican el espacio, rompen las solidaridades peligrosas y hacen comunicarse a las personas bajo una particular relación jerárquica. A esta razón disciplinaria se añadió con el tiempo otra de carácter resocializador que, no obstante, nunca llegó a desplazar del todo las separaciones de contenido disciplinario y que, en muchas ocasiones, se limitaba a encubrirlas. Pero tampoco puede ignorarse que también los aspectos de racionalización y economización de los medios penitenciarios juegan un papel, de no escasa consideración, en la separación de los internos.

III.- Básicamente en los sistemas actuales encontramos dos grandes criterios de separación con sentidos totalmente distintos. El uno -para el que se reserva la expresión separación, de carácter regimental-, y el otro, terapéutico y empírico experimental -al que denominaremos, clasificación-. Mientras que las necesidades de aquel carecen de cualquier constatación empírica, de manera que el sentido de la

separación se agota con el traslado del interno a la correspondiente sección o establecimiento, las de este responden formalmente a un método para conducir la ejecución penal, dentro de un programa global de ubicación de los penados en el establecimiento y con las condiciones más adecuadas al modelo individualizado de ejecución, es decir, con medidas específicas de formación, trabajo, tiempo libre etc. La clasificación es la fórmula a través de la cual se articula el tratamiento resocializador al régimen y es, al menos, teóricamente el resultado de un proceso de individualización científica. Con esta denominación se pretendió pasar la página histórica de los sistemas progresivos en los que primaban los factores objetivos y, especialmente, el tiempo de cumplimiento para poder evolucionar dentro de él. No obstante, las indiscutibles ventajas del sistema clásico de objetividad y certeza lo han hecho resistente y aún encontramos pasajes en donde reaparece.

La mujer en la prisión.

Es conveniente comenzar afirmando que las estadísticas penitenciarias sobre población reclusa reflejan que el porcentaje de reclusas es poco significativo frente a la población masculina, moviéndose a nivel mundial en una horquilla comprendida entre el 5% y el 15 %. Además, resulta llamativo comprobar que entre las mujeres el porcentaje de extranjeras es superior al que se da en la población masculina, lo que va a incidir aún más en la vulnerabilidad de este colectivo, propiciando un doble estigma: tanto por el carácter retributivo que la privación de libertad comporta, como por su aislamiento cultural. La reclusión de la mujer en un centro penitenciario va a suponer una mayor vulnerabilidad, no sólo por los abusos y agresiones sexuales de los que es objeto con frecuencia, sino sobre todo en atención a la separación de su entorno familiar y el alejamiento de sus hijos. De ahí que estas circunstancias particulares exijan la adopción de medidas especiales que favorezcan la reinserción de las reclusas privadas de libertad.

Desde una perspectiva histórica podemos afirmar que las prisiones fueron construidas pensando sólo en la población reclusa masculina,

como centros de trabajo forzado, inimaginables para las condiciones físicas de la mujer. El aumento de la población reclusa femenina hizo preciso adaptar aquellos centros a las necesidades de este colectivo, sin que en todos los supuestos se haya logrado esa loable pretensión, por razones básicamente preconcebidas en los países en los que existen verdaderos esfuerzos por crear un sistema penitenciario de género y alternativo y las políticas penitenciarias más frecuentes se limitan a ubicarlas en espacios o establecimientos separados. No es exagerado, pues, afirmar que el mundo de las prisiones sigue teniendo una asignatura pendiente con el género. Incluso penas privativas de libertad con diseños más modernos, como el arresto de fin de semana, están pensadas para el hombre trabajador que de esta forma ve compatibilizado el calendario laboral con el punitivo, pero no para la mujer que, alejada del mercado laboral, puede interesarle, eventualmente, más la compatibilidad con otras cargas.

Una vez más las experiencias obtenidas han puesto de relieve los graves perjuicios que se originan en quienes son obligados a vivir durante largos períodos de tiempo sin ningún tipo de contacto con personas del sexo opuesto. La separación artificial provoca una sensación de bloqueo en este tipo de relaciones. Por el contrario, los establecimientos co-educativos ayudan a normalizar la vida dentro de la prisión y a que los internos aprendan a controlar sus sentimientos sobre sí mismos y sobre los demás y encontrar su identidad en un sentido positivo. No obstante, se trata de una de las separaciones con más raigambre histórica, aunque en las últimas décadas el régimen de separación se ha flexibilizado en la misma medida que la mujer se ha ido incorporando socialmente en régimen de igualdad con el hombre.

El fundamento esgrimido para separar hombres y mujeres es un pretendido riesgo de promiscuidades y contagios insalubres que en realidad ocultan los dictados de una determinada moral contraria a permitir no sólo las relaciones sexuales libres entre adultos, sino, incluso, las situaciones de riesgo. En este sentido, parece merecer menos atención los graves problemas de agresiones homosexuales que con tanta frecuencia se producen en las prisiones y la mercadería sexual

con la que se trata de compensar la falta de una vida sexual normalizada.

Por otro lado, las condiciones regimentales para la mujer, como consecuencia de su separación del colectivo de hombres -sensiblemente más numeroso-, se ven negativamente afectadas. Los servicios y los recursos generales, educación, sanidad, cultura, etc., son más incompletos y también las prestaciones de la administración.

No obstante, la fusión de estos dos grupos presenta algunas dificultades prácticas que recomiendan un estudio previo por parte de los equipos técnicos. Tanto el funcionario de prisiones, como la propia comunidad reclusa darían, probablemente, origen a ciertas tensiones. Habría que considerar, entre otras circunstancias, la conveniencia de equiparar el número de hombres y mujeres y, por supuesto, contar con el consentimiento de ambos.

En el plano internacional han sido varios los instrumentos jurídicos que han tocado este tema, siendo sensibles a las características de este grupo especialmente vulnerable que precisará la adopción de medidas "ad hoc" a sus necesidades. Este desiderátum no ha cristalizado aún en un auténtico modelo alternativo de género internacional convenido, si bien se han confeccionado unas recomendaciones mínimas. Concretamente las reglas mínimas de las naciones unidas en la regla 8 establece una separación de categorías entre los internos, al describir que "los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: los hombres y las mujeres deberán ser reclusos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento donde se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinados a las mujeres deberá estar completamente separado...."

Si bien las mujeres encarceladas son consideradas un grupo especialmente vulnerable por la segregación familiar, que su encarcelamiento supone, y porque, en ocasiones, resultan ser el único sostén económico de su familia, es preciso hacer referencia a otra

circunstancia que concurre en aquellas y, obviamente no concurre en el hombre, cual es la maternidad, agravando aún más esta vulnerabilidad. Si la reclusa encarcelada está embarazada, "el alumbramiento, coinciden las normas internacionales, deberá tener lugar, en la medida de lo posible, en un hospital civil, aun cuando los establecimientos de mujeres deberán también disponer de personal e instalaciones apropiadas para el parto y los cuidados postnatales"(Regla 28.1 Estrasburgo, 23.1 de Ginebra).

Asimismo, no debe olvidarse que, en ocasiones, las mujeres que han dado a luz en centros penitenciarios lo han hecho en condiciones higiénicas y sanitarias infrahumanas, llegando a registrarse casos en los que se les ha atado con grilletes en circunstancias contrarias a la dignidad de las personas, suponiendo un trato degradante proscrito en la declaración universal de los derechos del hombre (art. 3º) y en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos (art. 7), de ahí que se recomienda que "en los establecimientos para mujeres deberán existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible" (Regla 23.1 de Ginebra). En esta línea, el Principio 5 del "Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión" establece que "las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes, los niños y los jóvenes".

Incluso, con carácter general, la encarcelación para la mujer embarazada debe ser el último recurso, la última ratio, salvo que no exista ninguna otra alternativa, admitiéndose que el parto en la prisión sea una circunstancia excepcional, sobre todo por las secuelas psicológicas que el alumbramiento en la prisión puede conllevar para la reclusa el resto de su vida (art.2 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: " los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,

una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: c) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”).

Para concluir este apartado, hemos de comentar que, paralelamente a las disposiciones adoptadas en el marco de la unión europea, en el ámbito americano la declaración de San José, de 9 de marzo del 2010, reconoce la necesidad de dotar a este colectivo de una especial protección, lo que ya significa un avance considerable. De igual modo, el principio II de los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en Las Américas establece “que no serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, en particular de la mujeres embarazadas y de las madres lactantes ”.

Alternativas a la separación. Modelos de cohabitación.

La reclusión de las mujeres/madres en establecimientos penitenciarios conlleva irremisiblemente la privación de libertad de sus hijos, sufriendo una “sanción” más severa que la estricta privación de libertad. Y si la segregación es un estigma que agudiza aún más la encarcelación de la mujer en el establecimiento penitenciario, un tratamiento penitenciario acorde con el contexto de los derechos humanos debe ofrecer ciertas alternativas a la separación, ya sea a través de modelos de cohabitación, ya con la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad.

En primer lugar: con los modelos de cohabitación. Aunque los sistemas penitenciarios siguen dominados por los criterios de separación estricta que llega incluso a condicionar al personal penitenciario (las Reglas Mínimas Internacionales sobre buena práctica penitenciaria establecen: “bajo la dirección de un funcionario femenino responsable, guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. 2) ningún funcionario de sexo masculino penetrará en la sección femenina

sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 3) la vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Regla 53), la Regla 8 a de Ginebra y 11.1 y 2 de Estrasburgo, matizada en 1987 en Europa, establece que aun cuando en principio hombres y mujeres deben ser reclusos por separado, ello no deberá ser impedimento para la participación conjunta de los sexos en actividades organizadas en el marco de un determinado programa de tratamiento. Sin duda, es un avance muy limitado para quienes estamos convencidos de las bondades de los sistemas de cohabitación, pero, al menos, rompe una larga tradición de irracional separación que domina el panorama mundial.

La resolución (73) 5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el Conjunto de Reglas Mínimas para el tratamiento de los detenidos considera que el régimen del establecimiento penitenciario debe tratar de reducir las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, que tienden a debilitar el sentido de la responsabilidad del detenido o el respeto de la dignidad de su persona (principio 58). Conforme con ello, la existencia de módulos mixtos contribuirá a restablecer una cierta "normalización" en la relación del encarcelado con su vida familiar, favoreciendo su posterior reinserción.

En segundo lugar: con penas alternativas a la prisión.-

Si tenemos en cuenta el doble padecimiento que soporta la mujer privada de libertad –personal y familiar– y si consideramos los criterios preventivos más favorables que concurren, en la medida que la mayoría de la población reclusa femenina ha ingresado en prisión por haber cometido delitos no violentos, principalmente, tráfico de drogas y contra la propiedad, y no presentan un alarmante pronóstico de peligrosidad de que vayan a cometer delitos en el futuro, en ocasiones resulta más conveniente posibilitar medidas alternativas a la privación de libertad, que no impliquen el ingreso en prisión, posibilitando su cumplimiento en el ámbito comunitario, o en régimen de semi-libertad. Estas alternativas están siendo practicadas en la unión europea, concretamente en Italia, arrojando unos resultados muy satisfactorios frente a la privación de

libertad. Por ejemplo, aplazamiento de la pena hasta que los hijos cumplan una determinada edad, el arresto domiciliario o la suspensión.

Aspectos regimentales de los centros de mujeres.

Las especiales características que revisten el colectivo de mujeres privadas de libertad, que han sido expuestas con anterioridad, van a exigir, asimismo, de la adopción de medidas específicas en el régimen de los centros penitenciarios, donde estas se encuentren.

En primer lugar: en los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento (reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. (Regla 23).

En segundo lugar: cuando a las madres reclusas se les permita conservar sus niños, deberán tomarse disposiciones para organizar una sección de madres con instalaciones de guardería infantil, con personal cualificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres (reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Regla 234).

La estancia de niños en prisión.

Pero es el problema de los hijos menores en la prisión uno de los más delicados que se presentan para el sistema penitenciario cuando se intenta hacer compatibles los derechos del menor y de la maternidad en el escenario de una cárcel. En primer lugar, es preciso realizar una aproximación terminológica, tratando de definir el concepto de "niño" a nivel internacional. De una lectura de diversas disposiciones internacionales se entiende por niño "todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" (Art.1 Convención sobre los Derechos del Niño; Regla 11 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad)

Como se ha indicado con anterioridad, una de las circunstancias que suponía una mayor vulnerabilidad para la mujer encarcelada es la maternidad, sobre todo si tiene lugar dentro del establecimiento penitenciario. Con relación a la estancia de niños en prisión, deben distinguirse dos casos, como los bebés y los niños menores. En el caso de madres privadas de libertad con bebés recién nacidos la encarcelación reviste un matiz aún más delicado, si tenemos en cuenta que, tanto los recién nacidos como los bebés, tienen un vínculo físico y emocional de su madre, lo que va a exigir que ambos permanezcan unidos en la misma unidad, siendo desaconsejable trasladar al bebé a una guardería. Esta situación debe durar lo que se corresponde con el tiempo natural de lactancia.

El problema se plantea, pues, en el segundo período. Con respecto a los niños menores que ingresen con sus madres en prisión, es complejo determinar la edad idónea en que aquellos deban abandonar el centro penitenciario ya que se debe huir de reglas generales y resolver la cuestión ponderando circunstancias tan diversas como la madurez del menor, sus relaciones con la madre, el medio familiar, las alternativas exteriores o las condiciones del centro penitenciario, siendo, no obstante, aconsejable emplear un criterio restrictivo, por el entorno tan anómalo que los establecimientos penitenciarios suponen. La Regla 23.2 de Ginebra (28.2 Estrasburgo) establece que "cuando se permita a las madres reclusas conservar sus niños, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal cualificado donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres".

En todo caso, debe quedar claro que siempre serán prioritarios los derechos del menor frente a los de la maternidad. Como principio general debe tenerse en cuenta que un menor no debe estar en la cárcel. La presencia del hijo es siempre excepcional y, siempre que las circunstancias lo permitan es mejor egresar a la madre. Cuando no es posible deben buscarse alternativas asistenciales extra-penitenciarias.

Mucho menos se han atendido a los derechos de la paternidad, que en la sociedad libre se encuentran mucho más equiparados a los de la

maternidad. Es difícil de entender que razones justifican que se siga manteniendo en la mayoría de los sistemas penitenciarios un trato tan discriminatorio para el padre que trata de mantener consigo a su hijo, cuando este es menor y cuando cualquier otra alternativa, incluida la de quedar con la madre, es objetivamente menos recomendable.

Los jóvenes en la prisión.-

I.- El problema de la delincuencia juvenil y su reclusión es un tema muy controvertido, y, a la vez, estrechamente conectado con la responsabilidad penal de los menores. Hay bastante disparidad de criterios en el límite de edad penal adoptado por diversos países de nuestro entorno cultural, a partir de los cuales se puede ser imputable, estos es, responsable penal por las acciones u omisiones perpetradas. Para huir de formalismos sin contenido es recomendable aproximarse a un concepto de joven a partir de un doble criterio psico-cronológico, entendiéndose por tal quienes no hayan cumplido los veintiún años, pero también quienes se encuentren entre veintiún y veinticinco años-jóvenes adultos-, cuando el nivel evolutivo de su personalidad lo aconseje.

II.- En líneas generales dentro del régimen penitenciario, los convenios internacionales garantizan una serie de derechos a los internos menores/jóvenes, aconsejando su separación de los adultos y recomendando evitar la privación de libertad del niño (detención, encarcelamiento o prisión), siendo aplicables sólo como último recurso por el tiempo más breve posible. Se debe garantizar que goce de un proceso debido con todas las garantías y que mantenga el contacto con sus familiares, salvo en caso excepcionales. Por ejemplo, véase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que contenga la obligación de establecer una separación de las personas privadas de libertad, en atención a diversos criterios. Singularmente, el art.10, b) dispone que "los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. El art. 3 establece que "los menores

delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”.

En sentido similar al convenio referido con anterioridad, la CADH (suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos) se muestra sensible con la condición de los internos menores, disponiendo la necesidad de separar a los jóvenes procesados de los adultos, así como la conveniencia de llevarlos ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento (art. 5.5).

El art. 37 de la convención sobre los derechos del niño considera que “ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; todo niño privado de libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores aconseja la aplicación de la prisión preventiva como último recurso y durante el más breve plazo posible. Será preferible, siempre que ello sea posible, la adopción de medidas sustitutorias de la prisión provisional como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa (Regla 13).

En aquellos casos en que la aplicación de la prisión preventiva sea inevitable, los menores privados de libertad gozarán de todos los

derechos y garantías previstos en la reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobados por las Naciones Unidas. Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia –social, educacional, profesional, psicológica, médica y física– que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales (Regla 13). En sentido similar se han redactado las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (19 y 21).-

Problemas del internamiento de jóvenes.

III.- Como puede observarse en las disposiciones precedentes se trata de otro clásico criterio de separación que aparecía ya en la legislación penitenciaria del siglo XIX de profundo arraigo por su vinculación a las ideas preventivas. Desde una perspectiva criminológica la separación de los jóvenes tiene una justificación material de la que carece el criterio de género. Los jóvenes se encuentran en un período de aprendizaje socio-cultural distinto de los adultos. El orden jurídico es complejo con diferentes raíces de carácter histórico, cultural, ético, o fáctico, con sus realidades económicas, sociales y políticas. Transmitir este orden en el ánimo y la voluntad de las personas es un proceso inacabado – o, mejor, recién iniciado – en los jóvenes que genera tensiones y conflictos entre el mundo real y el ideal. La manifestación delictiva entre los jóvenes suele coincidir en la mayoría de los casos con ese conflicto. En este mismo sentido, señalaba Göppinger, que, en determinadas circunstancias, conseguir un efecto educativo en el joven con medios completamente distintos a los de los adultos es más fácil, ya que el delito del joven en muchas ocasiones es expresión de dificultades de desarrollo y no de una personalidad criminal.

Por otra parte, hay una corresponsabilidad de la opinión pública que, sin embargo, no se da –o, no se da tan intensamente– frente a la delincuencia adulta. Los medios de comunicación suelen vincular la delincuencia juvenil a la falta de una adecuada política social. La extensión de la droga, la falta de empleo o la crisis de la escolaridad se ven como los factores determinantes de aquel problema. Estas

circunstancias favorecen que la sociedad acepte positivamente con respecto a los jóvenes delincuentes un mayor empeño en los tratamientos alternativos a la prisión y en el desarrollo dentro de ésta de programas terapéuticos. Gracias a esa "relajación punitiva" la separación de los jóvenes se asienta sobre principios distintos, como una "acción educativa intensa". Le son favorables todos los medios de atención, el establecimiento abierto, el desarrollo de cursos de formación, las actividades culturales y deportivas y, sobre todo, la actividad laboral. Las posibilidades de contacto con los padres y la familia, la garantía de un puesto de trabajo para el momento de la liberación y los establecimientos pequeños y urbanos son exigencias propias del régimen penitenciario para jóvenes.

Ahora bien, si la separación es recomendable como principio general, también debe contemplarse la posibilidad de que en ciertos casos adultos y jóvenes puedan compartir las mismas dependencias ya que aquellos pueden transmitir a estos una cierta madurez y experiencia vital muy positivas, de la que carecieron por razones familiares en su proceso de formación.

Sin embargo, en un análisis de derecho comparado, sorprende el escaso interés del legislador en alcanzar unas normas en las que se comprometa con un sistema penitenciario alternativo para jóvenes, teniendo en cuenta, que a diferencia del caso de las mujeres, los jóvenes son uno de los grupos más numerosos que forman la población penitenciaria en el mundo. No se trata de separar unos y otros en patios y pabellones distintos, sino emplear dicha separación para completar el proceso de individualización de la pena.

El régimen penitenciario en los establecimientos de jóvenes.

El principal objetivo del tratamiento penitenciario de menores confinados en centros penitenciarios consiste en garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad (Regla 26.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores) se trata de poner a su

disposición recursos que refuercen su reinserción tras la salida de la prisión.

Para alcanzar estos objetivos deben programarse una serie de acciones que partan de la idea de que el menor infractor presenta un déficit individual y unas circunstancias estructurales negativas. En consecuencia la pena debe ser entendida como una acción educativa intensa. Pero no es solo un problema de intensidad, sino también de adaptación, por lo que los criterios de planificación, separación y tratamiento de los adultos no pueden ser reproducidos burocráticamente en los centros de jóvenes.

Las peculiares circunstancias que rodean al menor privado de libertad merece una especial atención en lo que atañe a sus necesidades y problemas personales, sin que, en ningún caso, se justifique dispensar un menor cuidado, protección, asistencia, tratamiento y capacitación que el delincuente joven, garantizándose un tratamiento equitativo. (Regla 26.4).

Como principal pretensión se fomenta la cooperación entre los ministerios y los departamentos para otorgar al menor interno una formación académica o, según proceda, profesional adecuada, con la finalidad de garantizar que al salir no se encuentre en desventaja en el plano de la educación (Regla 26.6). La formación debe procurar tener un carácter integral para dotar al individuo de unos conocimientos y herramientas fundamentales para la adaptación a la sociedad, sin olvidar, la formación para el ocio y el fomento de los contactos con el exterior orientado a esos fines.

Finalmente, en aras de facilitar la reintegración y resocialización de los menores a la sociedad, y satisfacer las diversas de aquéllos específicas a su edad, se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos de transición, hogares educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas adecuados o pertinentes (Regla 29.1).